

Buenos Aires, 12 de junio de 2007.

Vistos los autos: "Línea 22 S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa", de los que

Resulta:

I) A fs. 37/45 se presenta la empresa "Línea 22 S.A." e inicia una acción declarativa contra la Provincia de Buenos Aires para que se declare la inconstitucionalidad del gravamen sobre los ingresos brutos que se pretende aplicar sobre la actividad del transporte interjurisdiccional de pasajeros que desarrolla, por ser violatorio de los arts. 31 y 67, inc. 12 de la Constitución Nacional y del régimen de coparticipación federal establecido en la ley nacional 20.221 y sus modificatorias. Funda la procedencia de la vía elegida como así también la competencia originaria del Tribunal.

Expresa que es permissionaria de la Subsecretaría de Transportes del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación para la realización de los servicios de transporte interjurisdiccional de pasajeros bajo el régimen de la ley 12.346. Agrega que las tarifas que se aplican y a las que se refiere en el presente caso son fijadas por aquel organismo estatal de acuerdo con las escalas y bases de la política oficial del sector, sin contemplar en su cálculo la incidencia del impuesto provincial a los ingresos brutos. En tales condiciones entiende aplicable la doctrina de Fallos: 308:2153, por considerar que tal pretensión fiscal configura un supuesto de doble imposición que, ante la imposibilidad de traslación al precio del servicio de transporte, contraviene lo dispuesto por el art. 9, inc. b, segundo párrafo, de la ley de coparticipación federal, para lo cual destaca que se encuentra sujeta al pago del impuesto a las ganancias (ley 20.628 y 22.016 y sus modificatorias).

Ofrece prueba y pide que se haga lugar a la demanda,

con costas.

II) A fs. 62/64 se presenta la Provincia de Buenos Aires y contesta la demanda. Niega en primer lugar el estado de incertidumbre, pues —según arguye— se cuestiona un acto de imperio del Estado local destinado a percibir lo que le corresponde en base a las facultades constitucionales reconocidas, y sostiene que el sistema de pago y repetición ulterior que está contemplado en su código fiscal es el medio apropiado para discutir la cuestión.

En cuanto al fondo de la pretensión afirma que la superposición del impuesto a los ingresos brutos con los gravámenes nacionales es admitida de manera expresa en la ley 23.548 (art. 9, inc. b, cuarto párrafo). Sin perjuicio de ello destaca que la actora —inscripta como contribuyente del impuesto a los ingresos brutos— ha consentido durante casi diez años la jurisdicción provincial así como la liquidación del impuesto que se cuestiona. Manifiesta, asimismo, que las Cámaras Empresariales del Autotransporte de Cargas y Pasajeros a la que pertenece la actora celebraron, el 27 de septiembre de 2000, un acuerdo con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires por el cual se comprometieron al estricto cumplimiento de sus obligaciones tributarias provinciales, a cambio de lo cual el Estado local se comprometió a reducir la alícuota del 3,5% al 1,5%.

Sostiene que la demandante ha aceptado sin cuestionamiento alguno la aplicación del tributo como consecuencia de lo cual, a su vez, recibió los beneficios de su reducción por lo que considera improcedente la acción intentada.

Considerando:

1º) Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional).

2°) Que la procedencia de la vía intentada sobre la base de lo dispuesto por el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se encuentra acreditada ante la pretensión de la actora de obtener la declaración de inconstitucionalidad del impuesto a los ingresos brutos establecidos por la ley 10.397 —devengados por la actividad del transporte interjurisdiccional—, la respuesta de la provincia —quien la rechaza y sostiene que es un acto de imperio del Estado dirigido a percibir lo que corresponda— y lo que resulta de las resoluciones determinativas y sumariales 204/98 y 072/97 (ver, fs. 250/258 y 259/263, respectivamente), a los que atribuye ilegalidad y lesión al régimen federal (Fallos: 322:2598; 323:19).

Por otro lado, resulta inconducente el argumento expuesto por el Estado local sobre la exigencia contenida en el art. 109 de su código fiscal, si se tiene en cuenta lo decidido en Fallos: 310:606, considerando 5°.

3°) Que en cuanto al fondo de la cuestión, cabe señalar que de conformidad con lo que se desprende del informe emitido por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte la empresa explota la línea n° 22 de carácter suburbano grupo uno de jurisdicción nacional (ver, fs. 106/107), bajo la modalidad de servicios “comunes” (conf. disposición 112 de la ex-Subsecretaría de Transporte Metropolitano y Larga Distancia, fs. 319/327 del expediente administrativo n° 2306-351184/97).

4°) Que cabe señalar que de conformidad con lo decidido por este Tribunal, la falta de discriminación en lo que respecta a la carga impositiva que habría recaído sobre esa actividad obsta al reconocimiento de la pretensión de la actora y torna sus agravios meramente conjeturales, en virtud

de la carencia de las pruebas conducentes para acreditar tal supuesto (conf. Fallos: 328:1442 y causa M.863.XXXVI “Microómnibus Quilmes S.A.C.I.F. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa”, pronunciamiento del 11 de julio de 2006).

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se decide: Rechazar la demanda promovida por “Línea 22 S.A.” contra la Provincia de Buenos Aires. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese, remítase copia de esta decisión a la Procuración General. Oportunamente dése intervención al señor representante del Fisco y archívese. RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA - CARMEN M. ARGIBAY.

ES COPIA

Nombre de la actora: **Línea 22 S.A. - Dres. Norberto Eugenio Fariñas, Gustavo Adolfo Blanco y Carlos Alberto Cucco**  
Nombre de los demandados: **Provincia de Buenos Aires - Dres. Alejandro J. Fernández Llanos y Luisa M. Petcoff**